



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado

Referencia:	Ejecutivo
Demandante:	JAIRO HERNAN VÉLEZ ORTIZ
Demandado:	JUAN CARLOS ANAYA MARTINEZ
Decisión:	Confirma auto
Radicado:	05001 31 03 014 2015 00373 01
Auto Nro:	089

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno

Procede esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, contra la providencia emitida el 25 de febrero de 2021, por el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE MEDELLÍN, mediante el cual se NIEGA LA TERMINACIÓN DEL PROCESO POR TRANSACCIÓN, dentro del proceso ejecutivo instaurado por JAIRO HERNAN VÉLEZ ORTIZ en contra de JUAN CARLOS ANAYA MARTINEZ.

ANTECEDENTES:

En el proceso ejecutivo de la referencia, mediante escrito del 29 de enero del presente año, la apoderada de la parte demandada solicita se termine el proceso por transacción judicial. El Juzgado de conocimiento en auto del 2 de febrero requirió a las partes para que aclararan la solicitud de terminación, indicando el demandante que los resistentes no habían cumplido a cabalidad lo acordado,

rechazando lo pedido en proveído del 25 de febrero, tras considerar que no se cumplía con lo establecido en el artículo 431 del C. General del P. y que la parte pretende se modifique dicho acuerdo, solicitando la demandante no se le impartiera trámite

Inconforme con dicha decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, negándose el horizontal y concediendo el de alzada.

Sustenta el inconforme su solicitud arguyendo que lo entendido por la Juez a quo con el escrito del 8 de febrero de 2021 presentado por la parte demandante era cambiar lo dispuesto en el contrato de transacción; sin embargo acorde con las normas procesales deben existir al menos dos momento de análisis diferentes para el despacho; el primero de control de legalidad de la mentada transacción aportada por la parte ejecutada; y segundo la pertinencia de la solicitud de terminación anticipada del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares; insistió que la providencia recurrida se refirió a la supuesta improcedencia de acceder a la aprobación de la transacción y a la terminación del proceso, empero no aludió ni se pronunció respecto del incumplimiento de las normas sustanciales de existencia y validez del acuerdo transaccional; señaló que la inconformidad del demandante radica en la falta de garantía real que soportaría el saldo restante de \$55.000.000.00, lo que implica la homologación tácita de la existencia del contrato de transacción en lo que concierne al contenido obligacional de las partes, pues no se discutió la validez del mismo, razón por la cual no tiene sustento jurídico rechazar sin más consideraciones el acuerdo referido, sin abordar en debida forma el asunto; en tanto éste cumple con las normas sustanciales y procesales que lo regulan en el Código Civil y Código General del

P.; manifestó que otro asunto sería determinar la viabilidad o no de acceder a la terminación del proceso mientras no se acredite su cumplimiento total, pero sin fijar que la transacción celebrada es un acuerdo válido, legal y vinculante para las partes que los suscribieron; señaló que no puede desconocerse que lo transado el 30 de julio de 2018 entre las partes tiene un cumplimiento parcial que no puede desconocerse ni por el despacho ni por el apoderado del ejecutado, encontrándose vigente y válido el acuerdo porque no hay pactos posteriores o decisiones judiciales que la hubieren dejado sin piso legal, encontrándose pendiente el pago de \$55.000.000.00 junto con los intereses acordados, el cual está dispuesto a cancelarlos; debiéndose considerar ésta suma la que debe sustituir la orden de apremio; refirió que en ningún caso debe entenderse como una modificación lo dicho, por lo contrario implica la intención de cumplimiento pleno, pues de una lectura de la cláusula sexta del documento de transacción es evidente que la suspensión del proceso estaba encaminada a que el ejecutado constituyera otra garantía real.

En suma, solicitó se reponga la decisión sobre la validez de la transacción.

Una vez corrido el traslado establecido en el artículo 326 ejusdem, las demás partes se pronunciaron. Recibido el expediente en esta Corporación, resulta preciso anotar que en sede de segunda instancia, lo procedente es dar aplicación a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 323 del Código General del Proceso, el cual respecto al trámite de la apelación de autos dispone que: "*Si el juez de segunda instancia lo considera inadmisibile, así lo decidirá en auto; **en caso contrario resolverá de plano y por escrito el recurso***", razón por la cual

al no advertirse la existencia de alguna causal de inadmisión del recurso, se procederá de plano a su resolución.

Siendo la oportunidad para resolver a ello se procede previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

La transacción es una figura que se encuentra instituida en el artículo 2469 del Código Civil, el cual la define como: *"un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual"*. Para que pueda hablarse de transacción, entonces, se requiere que los interesados, en el litigio pendiente o eventual, renuncien parte de sus pretensiones recíprocas o que haya mutua reducción de las mismas.

En ese orden se ha reiterado por la jurisprudencia que: *"De tal definición, que -con justicia- ha merecido la crítica de ser incompleta¹, la doctrina de la Corte, reiterada durante décadas, tiene sentado que son tres los elementos estructurales que la singularizan, a saber: (a) la existencia actual o futura de la discrepancia entre las partes acerca de un derecho; (b) la reciprocidad de concesiones hechas por los contratantes; y (c) su voluntad e intención de ponerle fin a la incertidumbre sin la intervención del Estado²."* Y ha precisado que: *"Ahora, participando el comentado acuerdo de la naturaleza de las convenciones, se rige por los principios que dominan los actos jurídicos, y se halla sometido, por tanto, al régimen general de formación y eficacia que campea en el derecho privado³, sin perjuicio de aquellas normas especiales requeridas por su propia índole."*

¹ Cfr. CSJ. SC. Sentencia de 6 de mayo de 1966; y del 29 de octubre de 1979. Igualmente: VALENCIA ZEA, Arturo. *Derecho Civil. Tomo IV. Contratos*. Pág. 251.

² Cfr. CSJ SSC del 12 de diciembre de 1938; 6 de junio de 1939; 19 de febrero de 1945; 22 de marzo de 1949; 6 de mayo de 1966; 22 de febrero de 1971; 29 de octubre de 1979; 20 de enero de 1987;

³ En el sentido recién apuntado: CSJ SSC del 6 de junio de 1939, 14 de diciembre de 1954, 29 de octubre de 1979 y 7 de febrero de 2000.

Por los efectos que produce se podría señalar que la transacción es judicial cuando se celebra para terminar un litigio; en este caso, se deberá dirigir al juez un escrito que consigne esa voluntad, o acompañando el documento de transacción. Y extrajudicial, cuando se procura precaver un litigio o para producir efectos fuera del proceso; no obstante, por su celebración se puede considerar que la transacción es siempre extrajudicial.

La transacción no produce siempre los efectos de transmitir directamente derecho alguno; por su naturaleza sirve para reconocer o declarar derechos que se controvierten judicialmente o que se pueden disputar por esa vía; por lo que se afirma que la transacción apenas contiene actos declarativos. Ésta no siempre tiene el carácter de declarativa, puede comprender actos constitutivos o dispositivos en cuanto sirve para crear, modificar o extinguir relaciones propias de los contratos y de los llamados actos constitutivos.

De lo antes citado se desprenden las siguientes características, (i) es consensual, porque se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades sobre lo que es objeto de la transacción; (ii) es bilateral, en cuanto ambas partes contraen obligaciones que se miden por los sacrificios y las concesiones recíprocas; (iii) es oneroso, puesto que las partes se gravan cada una en beneficio de la otra; (iv) es conmutativo cuando las partes conocen los alcances de las prestaciones; empero puede ser (v) aleatorio en cuanto no se pueda saber la proyección de los deberes y derechos negociales; (vi) es principal ya que no requiere de otro negocio jurídico para existir; y es (vii) nominado.

En caso que convoca la atención de la Sala, mediante escrito del 29 de enero del presente año la apoderada de la parte demandada aportó transacción extrajudicial celebrada entre las partes y en donde acordaron el pago de la suma de \$100.000.000.00 que incluía el capital, intereses y las costas procesales, los cuales serían cancelados así: (i) una cuota inicial de \$45.000.000.00 la cual se pagó el 25 de julio de 2018; (ii) el saldo de \$55.000.000.00 en abonos a capital que serían pactados por las partes con posterioridad al acuerdo, suma respecto de la cual se reconocería intereses de plazo al 1.7% mensual; y (iii) se pactó la suspensión del proceso hasta por seis meses para que los demandados otorgaran una garantía prendaria o hipotecaria que respaldara dicha suma, momento en cual se cancelaría la constituida por Juan Carlos Anaya Martínez.

En este sentido, se tiene que el acuerdo extraprocesal realizado por las partes se encuentra revestido de validez, circunstancia que nunca ha sido puesta en tela de juicio ni por el demandante ni por la Juez que conoce del asunto; el tema de discusión es el cumplimiento del mismos para dar por terminada la obligación.

En punto a ello, revisado el expediente digital se pudo verificar que efectivamente el demandado desde el mes de enero de 2021 esta solicitando se termine el proceso por el acuerdo transaccional realizado entre las partes. Empero para que el mismo surta efectos procesales, debía ser presentado por quienes lo celebraron, cosa que no ocurrió, pues de las piezas procesales aportadas se pudo verificar que solo la parte ejecutada es quien ha insistido en la validación de dicho acuerdo.

Sin embargo, la iudex a quo acorde con lo establecido en la parte final del inciso segundo del Art. 312 del C. General del P. corrió traslado al demandante, quien en escrito del 10 de febrero último solicitó: “...abstenerse de dar trámite a la solicitud de terminación de proceso (...) puesto que los demandados, no otorgaron la garantía prendaria o hipotecaria que respalda la obligación de \$55.000.000.00...”; es de resaltar además que la apoderada del demandando, manifestó en escrito del 8 de febrero que estaba prestó a cancelar la suma indicada una vez se terminará el proceso, situación que no puede ser aceptada, pues en este caso específico para que se proceda a ello primero se debía acreditar el pago y no después de proferida la decisión.

Ahora bien, modificar las sumas por las cuales se ordenó seguir adelante con la ejecución no es procedente, pues el acuerdo suscrito no ha sido aceptado, razón por la cual, debe el demandado acreditar probatoriamente el pago de las sumas allí indicadas y solicitar al Juez de Instancia que se le tengan como abono a la obligación pactada primigeniamente.

Deviene de lo anterior, que no era procedente en este caso la terminación como se solicitó, pues no se acreditó el cumplimiento de lo pactado debiendo CONFIRMAR el auto objeto de impugnación.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

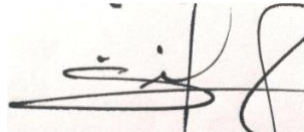
RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto de fecha y procedencia indicado en la parte motiva de esta providencia, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia

TERCERO. Para los efectos del inciso final del artículo 323 del C. G del P. se ordena comunicar lo decidido.

NOTIFÍQUESE



(Firma scaneada conforme al Art. 11 del Decreto 491 del 28 de Marzo de 2020 del Ministerio de Justicia y del Derecho)

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado